



Santiago de Cali, 12 de diciembre de 2022.

Señores

**JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DE CALI.**

Cali – Valle del Cauca

E. S. D.

**Radicación:** 76001-33-33-010-2022-00152-00

**Medio de Control:** NULIDAD Y RESTABLECIMIENTO DEL DERECHO.

**Demandante:** E.P.S. SURAMERICANA S.A.- EPS SURA.

**Demandada:** NACIÓN RAMA JUDICIAL DESAJ – CALI.

**NANCY MAGALI MORENO CABEZAS**, domiciliada en la ciudad de Santiago de Cali, concédula de ciudadanía No. 34.569.793 exp. En Popayán (Cauca) y Tarjeta Profesional de Abogada No. 213.094 del Consejo Superior de la Judicatura, en mi condición de apoderada de la **NACIÓN - RAMA JUDICIAL – DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL** en el proceso citado en la referencia, según poder que me fuera conferido, el cual me permito allegar al Despacho con sus respectivos anexos, otorgado por la Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial, Doctora CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA, quien actúa conforme a lo dispuesto en el artículo 103 numeral 7 de la Ley 270 de 1996, nombrada mediante Resolución No. 13092 del 18 de agosto de 2021 y posesionada mediante acta del 9 de septiembre de 2021; encontrándome dentro de la oportunidad legal, procedo a **CONTESTAR LA DEMANDA**, en los siguientes términos:

Pretende el extremo activo:

**PRIMERA:** La nulidad de los siguientes administrativos derivados de incapacidades y licencias de maternidad o paternidad, correspondientes a las vigencias 2015 y 2016.

1. Resolución No. **DESAJCLR21-2261** del 4 de octubre de 2021, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, a través del cual se ORDENÓ a la EPS SURA, el reintegro del monto que asciende a VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS (\$28.643.187) M/Cte., Así como intereses moratorios.
2. Resolución **DESAJCLR21-2579** del 16 de noviembre de 2021, expedida por la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, por medio de la cual se resolvió el recurso de reposición formulado contra la Resolución No. DESAJCLR21-2261.
3. **Resolución RH 0133** del 19 de enero de 2022 expedida por la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, mediante la cual se resolvió 3 el recurso de apelación interpuesto contra la Resolución No. DESAJCLR 21-2261 **que a la fecha no ha sido notificada en debida forma a mi representada.** (Negrilla fuera del texto original).

**SEGUNDA:** Como consecuencia de la anterior declaratoria, se pretende:

1. La suspensión de toda actuación administrativa, coactiva o judicial derivada de los Actos Administrativos aquí impugnados, precisando que ni la Resolución DESAJCLR21-2261 del 4 de octubre de 2021, ni ninguno otro en que se hubiere sustentado la decisión ahí advertida, hace las veces de título ejecutivo y en consecuencia, de ningún modo resultaría viable su cobro mediante la vía judicial o coactiva, por lo que ruego se ordene a la Dirección Ejecutiva Seccional de



Administración Judicial de Cali, abstenerse de librar mandamiento de pago de los actos impugnado; entre otros pedimentos.

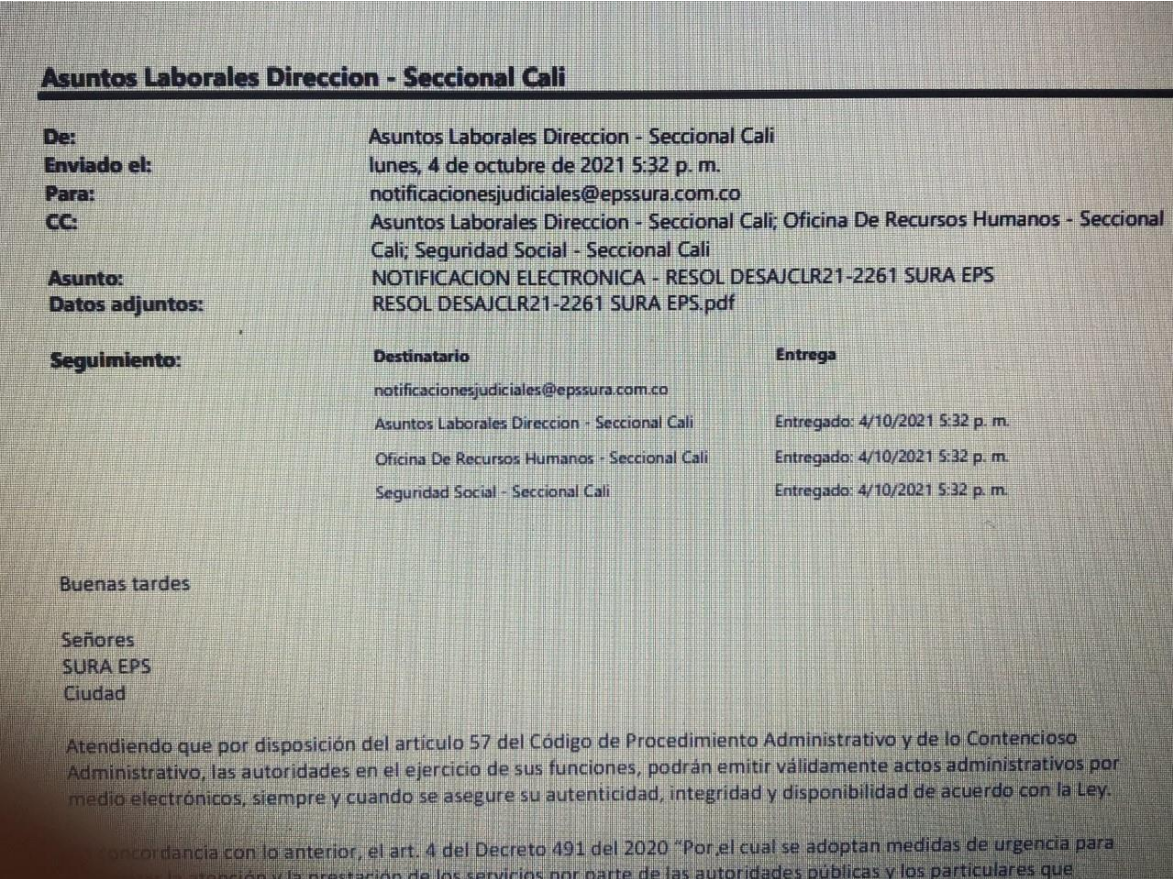
**A LAS PRETENSIONES**

Me opongo a todas las pretensiones de la demanda, toda vez que las mismas carecen de fundamentos jurídicos, no tienen motivación ni fundamentos de derecho concordantes con la realidad fáctica.

**A LOS HECHOS.**

1. **AL HECHO PRIMERO.** Es cierto que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial de Cali, se expidió el acto administrativo contenido en la **RESOLUCIÓN No. DESAJCLR 21-2261 de fecha 4 de octubre de 2021** por medio de la cual se ordenó a la hoy demandante el reintegro de VEINTIOCHO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA Y SIETE PESOS (\$28.643.187) M/CTE., por no haber realizado el pago de prestaciones económicas derivadas de incapacidades y licencias los servidores de la entidad.

Se adjunta pantallazo del acto de notificación surtida por la RAMA JUDICIAL DESAJ-CALI, al correo: **notificacionesjudiciales@epssura.com.co**  
En los términos del artículo 4 del Decreto 491 de 2020, 67 de la Ley 1437 de 2022 y 199 ibidem.



Cabe señalar que mediante acto administrativo contenido en la Resolución No. RH-0133 19 ENE. 2022, mediante la cual se resolvió un recurso de reposición, se dispuso:

**“ARTÍCULO PRIMERO. Revocar parcialmente las Resoluciones DESAJCLR21-2261 del 4 de octubre de 2021 y DESAJCLR21-2579 del 16 de noviembre de 2021 expedidas por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, en el**





*sentido de establecer que la deuda real a pagar por parte de la EPS SURAMERICANA S.A. sigla EPS SURA con Nit 800088702-2, a favor de la Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, es por la suma de veintiocho millones trescientos treinta y cinco mil setecientos cinco pesos m/l (\$28.335.705) por el recobro de las incapacidades otorgadas a los servidores judiciales afiliados a dicha EPS por el periodo comprendido entre el noviembre de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo”. (Negrilla y subrayado fuera del texto original).*

RESOLUCIÓN 133 de 2022, acto definitivo notificado a los correos: [notificacionesjudiciales@suramericana.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@suramericana.com.co) y [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co) , a las 9:34 a.m., tal y como se advierte a continuación:

**Asuntos Laborales Direccion - Seccional Cali**

**De:** Asuntos Laborales Direccion - Seccional Cali  
**Enviado el:** Lunes, 24 de enero de 2022 9:34 a. m.  
**Para:** [notificacionesjudiciales@suramericana.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@suramericana.com.co); [notificaciones@gha.com.co](mailto:notificaciones@gha.com.co)  
**CC:** Claudia Alexandra Briceño Mejía; Asuntos Laborales Direccion - Seccional Cali  
**Asunto:** NOTIFICACION ELECTRONICA - RESOLUCIÓN NRO. RH-0133  
**Datos adjuntos:** RES. No. RH - 0133 - 2022.pdf

Seguimiento:	Destinatario	Entrega
	<a href="mailto:notificacionesjudiciales@suramericana.com.co">notificacionesjudiciales@suramericana.com.co</a>	
	<a href="mailto:notificaciones@gha.com.co">notificaciones@gha.com.co</a>	
	Claudia Alexandra Briceño Mejía	Entregado: 24/01/2022 9:34 a. m.
	Asuntos Laborales Direccion - Seccional Cali	Entregado: 24/01/2022 9:35 a. m.

Buenos días

Doctor  
GUSTAVO ALBERTO HERRERA AVILA  
Apoderado SURA EPS  
Ciudad

Atendiendo que por disposición del artículo 57 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, las autoridades en el ejercicio de sus funciones, podrán emitir válidamente actos administrativos por medio electrónicos, siempre y cuando se asegure su autenticidad, integridad y disponibilidad de acuerdo con la Ley.

En concordancia con lo anterior, el art. 4 del Decreto 491 del 2020 "Por el cual se adoptan medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de las autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas de prestación de

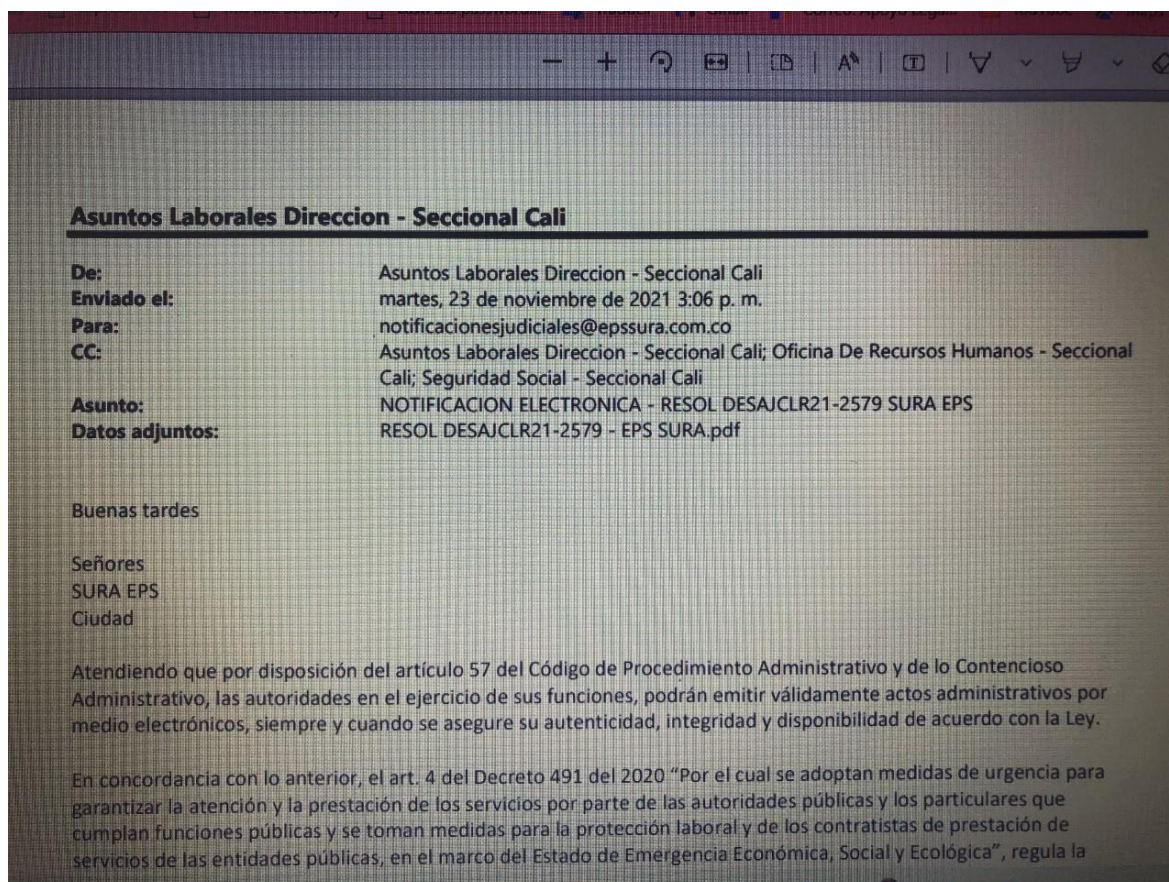
**Es decir, que también este acto administrativo fue conocido oportunamente por la sociedad demandante, al igual que los proferidos previamente expedidos por mi representada, quedando ejecutoriado este último RH- 0133 19 ENE. 2022, el 8 de febrero de 2022.**

2. **AL HECHO SEGUNDO.** Es cierto que el acto administrativo precitado, fue recurrido dentro de la oportunidad legal, lo que deja entrever que la sociedad demandante actuó oportunamente por lo que la actuación se entendió notificada, es decir no puede argumentar una indebida notificación, aspecto con lo que no estamos de acuerdo por cuanto de haber existido alguna falencia, se entendieron notificados por CONDUCTA CONCLUYENTE, en los términos del artículo 72 de la Ley 1437, pues: Con la actuación la sociedad demandante, reveló que conoció el acto administrativo y a su vez, interpuso los recursos de ley.
3. **AL HECHO TERCERO.** Me permito aclar que la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial DESAJ- CALI, notificó en los términos de ley, el acto administrativo contenido en la Resolución DESAJCLR21-2579 del 16 de noviembre de 2021, igualmente se les remitió copia al correo electrónico [notificacionesjudiciales@epssura.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@epssura.com.co) , el 23 de noviembre de 2021, a las





3:06 p.m., tal y como aparece en el pantallazo que a continuación se incluye y que como prueba documental se allega:



Habrà de tenerse en cuenta que ya se habían adoptado medidas especiales en virtud de la Pandemia COVID-19 y de lo estipulado en el Decreto 491 de 2020 “Por medio del cual se adoptaron medidas de urgencia para garantizar la atención y la prestación de los servicios por parte de autoridades públicas y los particulares que cumplan funciones públicas y se toman medidas para la protección laboral y de los contratistas por prestación de servicios para por lo que estaban plenamente autorizadas las notificaciones a través del correo electrónico, lo que es concordante con lo dispuesto en el artículo 197 de la Ley 1437 de 2011, el cual refiere:

**“ARTÍCULO 197. Dirección electrónica para efectos de notificaciones.** Las entidades públicas de todos los niveles, las privadas que cumplan funciones públicas y el Ministerio Público que actúe ante esta jurisdicción, deben tener un buzón de correo electrónico exclusivamente para recibir notificaciones judiciales.

*Para los efectos de este Código se entenderán como personales las notificaciones surtidas a través del buzón de correo electrónico.”*

Aunado a lo establecido en el artículo 67 de la Ley 1437 de 2022, el cual dispone:

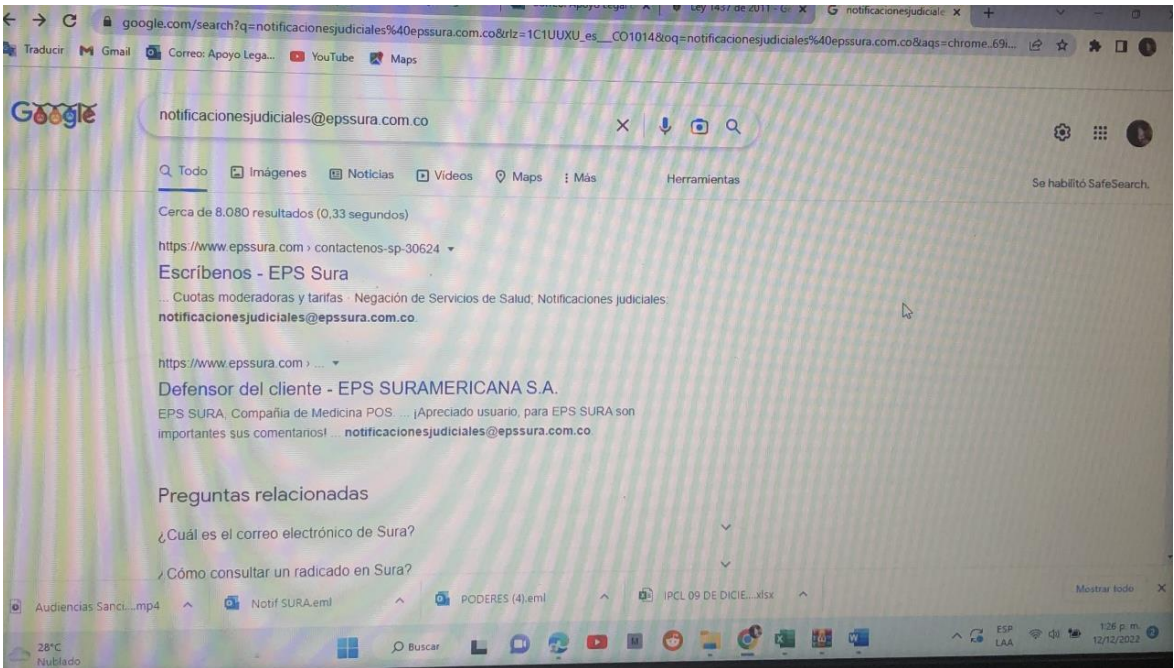
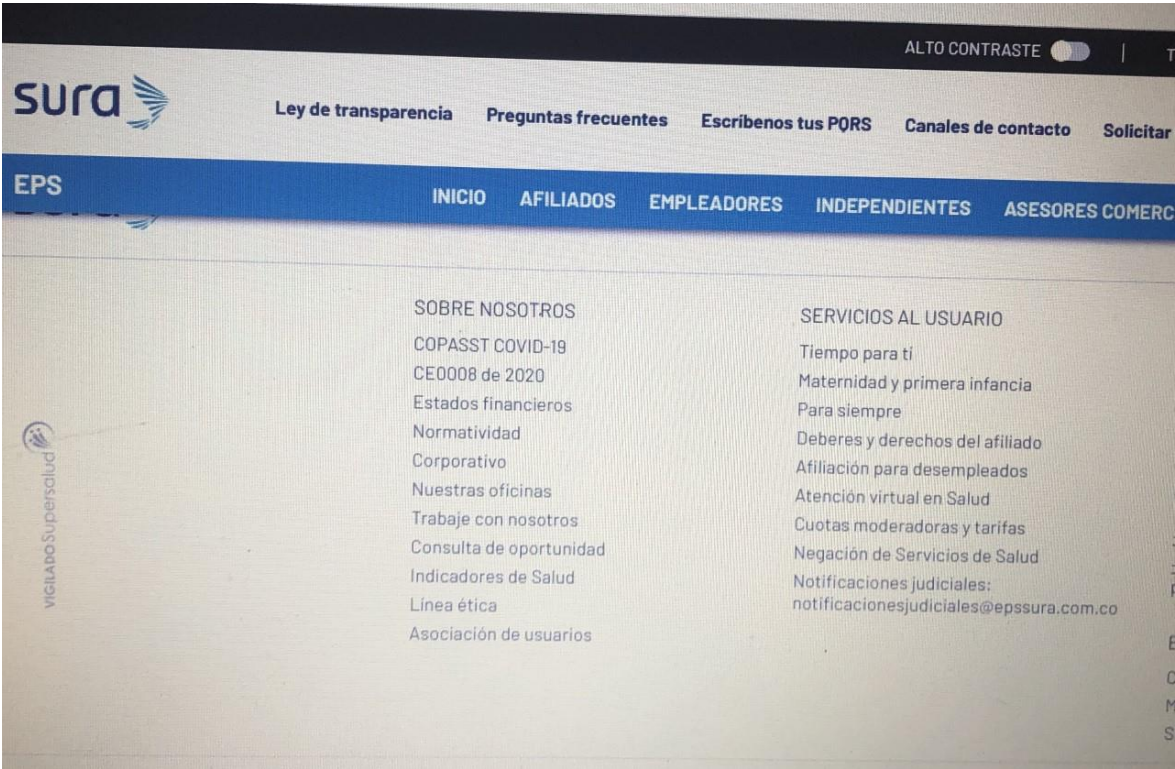
**“ARTÍCULO 67. Notificación personal.** Las decisiones que pongan término a una actuación administrativa se notificarán personalmente al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada por el interesado para notificarse.”

Es decir que no ha existido irregularidad alguna en el acto de notificación realizada por la RAMA DESAJ, tal y como lo pretende hacer ver la parte actora, a efectos de prescindir de los pagos adeudados.





4. **AL HECHO CUARTO.** Me atengo a lo que se acredite legal y oportunamente. LA NACIÓN RAMA JUDICIAL DESAJ, también notificó a la sociedad demandada el acto administrativo contenido en la Resolución DESAJCLGCC22-1888 del 29 de marzo de 2022, en la dirección electrónica [notificacionesjudiciales@epssura.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@epssura.com.co), donde se puso en conocimiento lo atinente al “cobro persuasivo Recobro e incapacidad No. 76001129000020220007100”. Derivado de la Resolución No. DESAJCLR21- 2261, ejecutoriada y en firme el 25 de enero de 2022.



Se tiene que la sociedad EPS SURA, conoció de manera oportuna de todos los actos administrativos que expidió la RAMA JUDICIAL DESAJ – CALI, pues su página WEB oficial, al igual que en toda la información que aparece en sus portales en internet informan a la ciudadanía que el correo oficial para notificaciones judiciales



es: [notificacionesjudiciales@epssura.com.co](mailto:notificacionesjudiciales@epssura.com.co), aunado a lo anterior, se dieron por notificados y derivado de ello, hubo pronunciamiento en relación con los mismos y consideramos que no les es dable argumentar ante esta instancia, la omisión en la notificación de los actos acusados, pues se itera que se pronunciaron una vez conocieron los actos administrativos expedidos.

### **RAZONES DE DEFENSA**

1. En principio se advirtió que La EPS SURA S.A., reiteradamente adeuda esta Dirección Seccional por concepto de pagos de Incapacidades y para el caso concreto pese a la gestión adelantada, no ha procedido al pago de los valores adeudados por las incapacidades aludidas.
2. Mediante oficio UA16-278 del 26 de agosto de 2016, la Unidad de Auditoria del Consejo Superior de la Judicatura, informa que:

*“Conforme a lo observado en el informe UA16-017 Auditoria Nacional al Manejo y Control de las Incapacidades por Cobrar de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y sus Direcciones Seccionales – corte a 31 de diciembre de 2015 y atendiendo lo estipulado en los artículos 209 y 269 de la Constitución Política de Colombia y en concordancia con lo establecido en el artículo 105 de la Ley 270 de 1996, la ley 87 de 1993 y el acuerdo PSAA16- 10494, referentes a las facultades de vigilancia y control otorgadas a esta Oficina y, teniendo en cuenta el pronunciamiento de la Corte Constitucional, mediante la Sentencia C-103 de marzo 11 de 2015, que traslado la función de advertencia a las Oficinas de Control Interno, es mi deber advertir sobre el riesgo de pérdida de los recursos evidenciado en el Informe de Auditoria...”*

*Documento en el cual se recomendó lo siguiente:*

*En este sentido, esta Unidad recomienda que para evitar llegar a una situación de prescripción de estos valores, la Entidad debe mantener un mecanismo efectivo de recobro que garantice la recuperación de los recursos pagados a los servidores judiciales y que deben asumir las Entidades Promotoras de Salud – EPS y Administradoras de Riesgo Laborales – ARL, con el fin de impedir un detrimento patrimonial”*

Todo lo anterior su señoría por cuanto no pagan las obligaciones de manera oportuna, sino, una vez se inicia el proceso de cobro coactivo, pese a que previamente se realizan gestiones para el recobro, es decir, conocen con antelación sobre las sumas y conceptos adeudados; es preciso señalar que la RAMA JUDICIAL DESAJ, no puede estar indefinida en el tiempo a la espera de que la hoy demandante se organice administrativamente y decida el pago de las obligaciones a su cargo, todo lo anterior, genera para mi representada un perjuicio que con el mero transcurso del tiempo conlleva una obligación prescrita con las consecuencias económicas negativas para la entidad, sin perjuicio de las disciplinarias a las que hay lugar.

3. Mediante la CIRCULAR DEAJC16-79, la Directora Ejecutiva de Administración Judicial, Dra. CELINEA OROSTEGUI DE JIMENEZ, informa que el “Consejo Superior de la Judicatura se encuentra comprometido con el proceso de alistamiento de la información contable, requerido para la implementación de las Normas Internacionales de Contabilidad Pública – NICSP -, normatividad adoptada por la Contaduría General de la Nación, mediante la Resolución No.- 533 del ocho (08) de octubre de 2015” Se adoptó la decisión de VERIFICAR Y DEPURAR el inventario de las incapacidades pendientes por cobrar a las E.P.S y A.R.L, proceso a cargo de los Director@s Seccionales y a la Unidad de Recursos Humanos de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.
4. En la Resolución No. RH- 0133 del 19 de enero de 2012, se advierte de manera definitiva el contenido obligacional de la demandante así:



Identificación	Apellidos	Nombres	Tipo Inc	Fecha Desde	Fecha Hasta	Valor Pendiente incapacidad	Valor Pagado	Valor Pendiente	Centro de Costo
30347102	Gaitán Obando	María Olinda	IGE	6/03/2019	4/04/2019	122.020		122.020	8
31525422	Pérez Ortiz	Myriam	IGE	11/02/2019	12/03/2019	484.169		484.169	8
31525422	Pérez Ortiz	Myriam	IGE	11/06/2019	10/07/2019	93.656		93.656	8
38859320	Daraviña Aguirre	Amelvy	IGE	11/08/2019	30/08/2019	3.903.812		3.903.812	8
38859320	Daraviña Aguirre	Amelvy	IGE	31/08/2019	20/09/2019	92.160		92.160	8
38859320	Daraviña Aguirre	Amelvy	IGE	12/07/2019	10/08/2019	122.879		122.879	8
16705055	Rodriguez Salcedo	Jose Reinaldo	IGE	24/06/2019	27/06/2019	4.476		4.476	8

Identificación	Apellidos	Nombres	Tipo Inc	Fecha Desde	Fecha Hasta	Valor Pendiente incapacidad	Valor Pagado	Valor Pendiente	Centro de Costo
67045555	Giraldo Cardoza	Karla Tatiana	LMA	18/01/2019	19/06/2019	557.609		557.609	8
1094886189	Valencia Serna	Andres Felipe	IGE	29/08/2019	3/09/2019	871.966		871.966	8
66908722	Vernaza Díaz	Mónica María	IGE	17/09/2019	1/10/2019	25.184		25.184	8
66908722	Vernaza Díaz	Mónica María	IGE	19/07/2019	18/08/2019	152.835		152.835	8
66908722	Vernaza Díaz	Mónica María	IGE	19/08/2019	16/09/2019	23.182		23.182	8
31476338	Arbeláez Valdés	Beatriz Eugenia	IGE	13/11/2019	15/11/2019	85.690		85.690	8
1010189298	Rodriguez Rojas	María Alejandra	IGE	6/09/2019	11/09/2019	285.299		285.299	8
28542226	Sánchez Villanueva	Yenny	IGE	20/03/2019	17/04/2019	1.751.696		1.751.696	8
28542226	Sánchez Villanueva	Yenny	IGE	18/04/2019	30/04/2019	843.409		843.409	8
1014226826	Ortega Higuera	Carlos Arturo	IGE	8/02/2019	22/02/2019	18.955		18.955	8
66949894	Silva Barreiro	Aura Maritza	IGE	26/06/2019	30/06/2019	9.616		9.616	8
14884744	Quevedo Cárdenas	Jose Fernando	IGE	5/03/2019	8/03/2019	232.401		232.401	8
14884744	Quevedo Cárdenas	Jose Fernando	IGE	20/03/2019	3/04/2019	1.743.009		1.743.009	8
14884744	Quevedo Cárdenas	Jose Fernando	IGE	26/10/2019	9/11/2019	1.786.475		1.786.475	8
14884744	Quevedo Cárdenas	Jose Fernando	IGE	10/11/2019	9/12/2019	3.572.951		3.572.951	8
14884744	Quevedo Cárdenas	Jose Fernando	IGE	10/12/2019	8/01/2020	3.126.332		3.126.332	8
66709879	Montaño Castañeda	María Sulay	IGE	3/02/2019	5/02/2019	1.458		1.458	8
31984649	Osorio Mina	Ana Cecilia	IGE	26/09/2019	30/09/2019	133.052		133.052	8
34554637	Londoño Forero	Mónica	IGE	4/09/2019	6/09/2019	252.460		252.460	8
1136059312	Ñañez Cucuñame	Jeniffer	IGE	23/07/2019	7/08/2019	2.020.628		2.020.628	8
1065004066	Esquivia Petro	Kellys Sofia	IGE	11/02/2019	12/02/2019	125.144		125.144	8
1065004066	Esquivia Petro	Kellys Sofia	IGE	15/02/2019	15/02/2019	807		807	8





31935256	Armendariz Medina	Amira	IGE	19/11/2018	23/11/2018	251.778		251.778	8
94474798	Zapata Libreros	Cristhiam Pavell	IGE	19/06/2019	21/06/2019	5.991		5.991	8
31942486	Reyes Romero	Adriana María	IGE	15/01/2019	11/03/2019	4.392.377		4.392.377	8

Identificación	Apellidos	Nombres	Tipo Inc	Fecha Desde	Fecha Hasta	Valor Pendiente incapacidad	Valor Pagado	Valor Pendiente	Centro de Costo
43207313	Hoyos Correa	Ángela María	IGE	18/07/2019	6/08/2019	492.698		492.698	8
79882486	Ruiz García	Jaime Enrique	LMA	13/06/2019	25/06/2019	307.482	307.482	-	2
79882486	Ruiz García	Jaime Enrique	IGE	12/08/2019	16/08/2019	364.251		364.251	2
16584331	Clavijo Cortes	Henry	IGE	15/03/2019	15/03/2019	238.978		238.978	8
20688199	Camacho Bonilla	Ángela María	IGE	8/02/2019	11/02/2019	882		882	8
1144064796	Ríos Manzano	Andres Felipe	IGE	5/10/2019	8/10/2019	59.730		59.730	8

TOTAL	28.643.187	307.482	28.335.705
-------	------------	---------	------------

Acto administrativo que finalmente decidió:

“Revocar parcialmente las Resoluciones DESAJCLR21-2261 del 4 de octubre de 2021 y DESAJCLR21-2579 del 16 de noviembre de 2021 expedidas por la Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, en el sentido de establecer que la deuda real a pagar por parte de la EPS SURAMERICANA S.A. sigla EPS SURA con Nit 800088702-2, a favor de la Nación – Rama Judicial – Dirección Seccional de Administración Judicial de Cali, es por la suma de **veintiocho millones trescientos treinta y cinco mil setecientos cinco pesos m/l (\$28.335.705)** por el recobro de las incapacidades otorgadas a los servidores judiciales afiliados a dicha EPS por el periodo comprendido entre el noviembre de 2018 y hasta el 31 de diciembre de 2019, por las razones expuestas en la parte motiva de este acto administrativo.”

Notificado legal y oportunamente a la hoy demandante.

- 5. Se señala que en virtud de lo dispuesto en el parágrafo 1 del artículo 24 del Decreto 4023 de 2011 y dentro de las facultades otorgadas en el artículo 103 de la Ley 270 de 1996, realizó los trámites ante EPS SURA, en tal sentido se emitieron sendas comunicaciones a EPS SURA mediante las cuales hizo el recobro de las incapacidades, por lo que está facultada la NACIÓN RAMA-DESAJ, para el cobro.
- 6. En la Rama Judicial la ordenación del gasto y la función pagadora se encuentran desconcentradas en virtud de la competencia funcional asignada por la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia. Es así como, el recobro de las prestaciones económicas a cargo del Sistema de Seguridad Social Integral, como la que nos ocupa, le corresponde en primera instancia a la seccional de Cali, en aras de salvaguardar sus derechos al debido proceso, el de contradicción y el principio de la doble instancia.
- 7. En lo atinente al auxilio por incapacidad, el mismo se define como el reconocimiento de la prestación de tipo económico y pago de la misma que hacen las Entidades Promotoras de Salud -EPS-, a sus afiliados cotizantes, por todo el tiempo que estén inhabilitados física o mentalmente para desempeñar en forma temporal su profesión u oficio habitual, conforme a lo preceptuado en los artículos 18 del Decreto-Ley 3135





de 1968, 206 de la Ley 100 de 1993 y 2.2.5.5.13 del Decreto 1083 de 2015, el último precepto legal dispone:

- 7.1. “Artículo 2.2.5.5.13 Prestaciones económicas derivadas de las licencias por enfermedad y riesgos laborales y de la licencia de maternidad o paternidad. Durante la licencia por enfermedad general o profesional, maternidad o paternidad el empleado tiene derecho a las prestaciones económicas señaladas en la normativa que las regula, las cuales estarán a cargo de la entidad de seguridad social competente.  
**Cuando la licencia por enfermedad general sea igual o inferior a dos (2) días se remunerará con el 100% del salario que perciba el servidor. A partir del tercer día la licencia por enfermedad genera vacancia temporal en el empleo y se remunerará de conformidad con las normas de Seguridad Social en Salud**” (Negrilla fuera del texto original).
8. Deberá tenerse en cuenta que a partir del tercer día el pago del auxilio económico por enfermedad de origen común, se realiza a razón de las dos terceras partes (66.66%) por los primeros noventa días y la mitad por los otros noventa y que **dicha prestación económica debe ser reconocida por la EPS a la cual se encuentra afiliado el servidor judicial al momento de otorgarle la incapacidad.**
9. El artículo 121 del Decreto Ley 019 de 2012 dispone que el empleador es el encargado de adelantar de manera directa ante las EPS.
10. El artículo 2.2.3.1. del Decreto 780 del 2016 que compiló lo normado por el Decreto 4023 de 2011 el cual prevé que las Entidades Promotoras de Salud (EPS), deberán efectuar los reintegros de las prestaciones económicas por concepto de incapacidades y licencias de maternidad y de paternidad a través de reconocimiento directo o transferencia electrónica en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la autorización de la prestación económica por parte de la EPS.
11. En concordancia con lo anterior, deberá considerarse lo estipulado en el artículo 3 del Decreto 1333 de 2018, que prescribe:
- “Sustitúyase el Título 3 de la Parte 2 del Libro 2 del Decreto 780 de 2016, así:  
(...) PAGO DE PRESTACIONES ECONÓMICAS Y CONVENIOS INTERNACIONALES Artículo 2.2.3.1.1. Pago de prestaciones económicas. A partir de la fecha de entrada en vigencia de las cuentas maestras de recaudo los aportantes y trabajadores independientes no podrán deducir de las cotizaciones en salud los valores correspondientes a incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad y/o paternidad. El pago de estas prestaciones económicas al aportante será realizado directamente por la EPS y EOC, a través de reconocimiento directo o transferencia electrónica en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la autorización de la prestación económica por parte de la EPS o EOC. La revisión y liquidación de las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas se efectuará dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud del aportante”.*
12. El artículo 28 de la Ley 1438 de 2011, el cual establece que el empleador tiene el derecho de solicitar a las EPS el reembolso del pago de las prestaciones económicas.
13. La sociedad demandante pretende sustraerse el cumplimiento del pago de las incapacidades que la RAMA JUDICIAL ha pagado a sus diferentes servidores judiciales que presentaron la documentación pertinente relativa a INCAPACIDADES, LICENCIAS DE MATERNIDAD O PATERNIDAD o que se encuentran como afiliados a la E.P.S. demandante en los términos de la Ley 100 de 1993, se precisa que los actos administrativos de recobro se encuentran debidamente soportados para el trámite de recobro.
14. El Parágrafo 1 y 2 del artículo 24 del Decreto 4023 de 2011, señala:



Artículo 24. Pago de prestaciones económicas. A partir de la fecha de entrada en vigencia de las cuentas maestras de recaudo, los aportantes y trabajadores independientes, no podrán deducir de las cotizaciones en salud, los valores correspondientes a incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad y/o paternidad.

El pago de estas prestaciones económicas al aportante, será realizado directamente por la EPS y EOC, a través de reconocimiento directo o transferencia electrónica en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles contados a partir de la autorización de la prestación económica por parte de la EPS o EOC. La revisión y liquidación de las solicitudes de reconocimiento de prestaciones económicas se efectuara dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a la solicitud del aportante.

En todo caso, para la autorización y pago de las prestaciones económicas, las EPS y las EOC deberán verificar la cotización al Régimen Contributivo del SGSSS, efectuada por el aportante beneficiario de las mismas.

Parágrafo 1°. La EPS o la EOC que no cumpla con el plazo definido para el trámite y pago de las prestaciones económicas, deberá realizar el reconocimiento y pago de intereses moratorios al aportante, de acuerdo con lo definido en el artículo 4° del Decreto 1281 de 2002.

Parágrafo 2°. De presentarse incumplimiento del pago de las prestaciones económicas por parte de la EPS o EOC, el aportante deberá informar a la Superintendencia Nacional de Salud, para que, de acuerdo con sus competencias esta entidad adelante las acciones a que hubiere lugar”. Subraya fuera de texto.

15. A su vez, el Decreto 1281 de 2002, “Por el cual se expiden las normas que regulan los flujos de caja y la utilización oportuna y eficiente de los recursos del sector salud y su utilización en la prestación” señala:

*“Artículo 4°. Intereses moratorios. El incumplimiento de los plazos previstos para el pago o giro de los recursos de que trata este decreto, causará intereses moratorios a favor de quien debió recibirlos, liquidados a la tasa de interés moratorio establecida para los tributos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales”*

16. Teniendo en cuenta lo acontecido y ante la mala fe e inobservancia de los términos y diversos requerimientos por parte de la EPS SURA S.A., se ha configurado el supuesto para el pago de dichos intereses.
17. Señala la parte actora que mi representada carece de competencia para realizar el cobro objeto de los actos administrativos acusados, al respecto me permito señalar lo siguiente:
- 17.1. Los artículos 112 y 136 de la Ley 6° de 1992 establecen que las entidades públicas del orden nacional y en particular la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial, están facultadas para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor y el de la Nación.
- 17.2. El Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo dispone, sobre el deber que les asiste a las entidades públicas para recaudar las obligaciones creadas a su favor, con soporte en documentos que presten mérito ejecutivo, estos son, en los que conste la existencia de una obligación clara, expresa y exigible.





Conforme a lo preceptuado en el numeral 1 del artículo 99 de la Ley 1437 de 2011<sup>1</sup>, las resoluciones que ordenen el pago, independiente del origen de la obligación, siempre y cuando se encuentre ejecutoriadas son exigibles por el procedimiento administrativo de cobro coactivo y gozan de presunción de legalidad mientras la jurisdicción Contenciosa Administrativa no se hubiere pronunciado al respecto<sup>2</sup>.

- 17.3. La Honorable Corte Constitucional en la sentencia C-069 del 23 de febrero de 1995, dispuso:

*"La existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la Administración, y en sí mismo lleva envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea de carácter general o individual. (...) el acto administrativo tiene carácter ejecutorio, produce sus efectos jurídicos una vez cumplidos los requisitos de publicación o notificación, lo cual faculta a la Administración a cumplirlo o a hacerlo cumplir." (negrillas fuera de texto).*

Se concluye que los actos administrativos contentivos de obligaciones a favor del Nación – Rama Judicial son exigibles a partir de su notificación al deudor y agotado el trámite en vía administrativa; vencido el término otorgado para el pago sin que se hubiere realizado, se traslada a la dependencia de cobro coactivo con el fin de hacer efectivo el derecho que en ellos se consagra, lo anterior está en concordancia con el Reglamento Interno para el Recaudo de Cartera de la RAMA JUDICIAL (Resolución 2041 del 20 de agosto de 2020) o la que lo modifique.

El artículo 4 del precitado Reglamento Interno para el Recaudo de Cartera a favor de la Nación – Rama Judicial, señala:

"Artículo 4º. Competencia. El Director Ejecutivo de Administración Judicial en uso de las facultades atribuidas en la Ley 1066 de 2006, otorgará poder a los abogados de las dependencias de cobro coactivo de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial y de sus Direcciones Seccionales, con el fin de ejercer la jurisdicción coactiva.

La competencia funcional y territorial para adelantar los procesos de cobro coactivo de las multas y sanciones dinerarias impuestas a favor de la Nación-Rama Judicial, se encuentra determinada conforme a las siguientes reglas:

- Competencia de cobro de la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial:
  - a. Contenidas en sus propios actos administrativos, independientemente del origen de la obligación (incumplimiento contractual, recobro de incapacidades, reintegros por concepto de mayores valores pagados por nómina, etc.).
  - (...)
- Competencia de cobro de las Direcciones Seccionales de Administración Judicial:

<sup>1</sup> "Todo acto administrativo ejecutoriado que imponga a favor de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley"

<sup>2</sup> Artículo 88 de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.



- a. Contenidas en sus propios actos administrativos, independientemente del origen de la obligación (incumplimiento contractual, recobro de incapacidades, reintegros por concepto de mayores valores pagados por nómina, etc.). (...)
- En concordancia con lo que se ha venido afirmando y acreditando, habrá de tenerse en cuenta la Circular Externa 026 del 26 de noviembre de 2015, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, dispone:

*“... aquellos recursos derivados de las incapacidades que las Entidades Prestadoras del Servicio de Salud y de Riesgos Profesionales reconocen y que deben ser reintegrados a la Dirección del Tesoro nacional toda vez que se trata de dineros que pertenecen a la Nación...”*

Por lo que está más que acreditado que le asiste no solo la facultad sino la obligatoriedad legal de REALIZAR LOS RECOBROS de las prestaciones económicas objeto de la presente demanda y a las que reiteradas veces se ha venido sustrayendo la hoy demandante.

El acto administrativo DEFINITIVO que ordena el recobro se encuentra debidamente notificado y ejecutoriado, esto es la RESOLUCIÓN No. RH- 0133 del 19 de enero de 2022.

- 17.4. **En relación con la Ley 270 de 1996**, es preciso señalar que la Directora Ejecutiva Seccional Cali, está facultada en virtud de dichas normativas para:

Numeral 2. **“Administrar los bienes y recursos destinados para el funcionamiento de la Rama Judicial y responder por su correcta aplicación o utilización.”** (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Numeral 3. **“Suscribir en nombre de la Nación-Consejo Superior de la Judicatura los actos y contratos que deban otorgarse o celebrarse, conforme a los actos de la delegación que expida el Director Ejecutivo de Administración Judicial.”** (Negrilla y subrayado fuera del texto).

Numeral 6. **“Actuar como ordenador del gasto para el cumplimiento de las obligaciones que correspondan.”**

Numeral 8. **Conceder o negar las licencias solicitadas por el personal administrativo en el área de su competencia.**

Numeral 9. **Solicitar a las autoridades competentes la adopción de las medidas necesarias para la protección y seguridad de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial.**

Numeral 11. **“Las demás funciones previstas en la ley, los reglamentos y los acuerdos del Consejo Superior de la Judicatura.**

18. Habrá de tenerse en cuenta el **artículo 103 de la Ley 270 de 1996 y los artículos 112 del Decreto 111 de 1996**, indicando que no sujetan a su contenido a ninguna norma que permita a la RAMA JUDICIAL, realizar el cobro coactivo de dineros presuntamente adeudados.

Es decir que no tiene fundamento lo señalado desde sus inicios por la EPS SURA S.A., pues el sustento normativo invocado en sede administrativa, está plenamente concatenado con las facultades y obligaciones a cargo de la RAMA DESAJ, por intermedio de su Directora Seccional.





- 18.1. En relación con lo estipulado en el Decreto 111 de 1996 **“Por el cual se compilan la Ley 38 de 1989, la Ley 179 de 1994 y la Ley 225 de 1995 que conforman el estatuto orgánico del presupuesto”**, que reprocha la hoy demandante, el mismo no puede omitirse en las actuaciones administrativas de las entidades del orden nacional como lo es la RAMA JUDICIAL, pues es el mismo decreto que prescribe:

**“ARTÍCULO 4.** Para efectos presupuestales, todas las personas jurídicas públicas del orden nacional, cuyo patrimonio esté constituido por fondos públicos y no sean empresas industriales y comerciales del Estado o sociedades de economía mixta o asimiladas a éstas por la ley de la República, se les aplicarán las disposiciones que rigen los establecimientos públicos del orden nacional (L. 179/94, art. 63).

**ARTÍCULO 10.** La ley anual sobre el presupuesto general de la Nación es el instrumento para el cumplimiento de los planes y programas de desarrollo económico y social (L. 38/89, art. 6).

**ARTÍCULO 12.** Los principios del sistema presupuestal son: la planificación, la anualidad, la universalidad, la unidad de caja, la programación integral, la especialización, la inembargabilidad, la coherencia macroeconómica y la homeóstasis (L. 38/89, art. 8; L. 179/94, art. 4).

**ARTÍCULO 16.** Unidad de caja. **Con el recaudo de todas las rentas y recursos de capital** se atenderá el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el presupuesto general de la Nación.

Entre muchos otros numerales de este estatuto orgánico al que deben ceñirse las entidades del orden al cual pertenece la RAMA JUDICIAL DESAJ.

Por lo que no tiene sustento el reproche que del acto administrativo inicialmente realizó el extremo activo.

19. Señala la parte actora que la NACIÓN - RAMA JUDICIAL no está facultada o no tiene competencia para el cobro de las obligaciones en su favor, se precisa lo siguiente:

- 19.1. Los artículos 112 y 136 de la Ley 6ª de 1992 establecen que las entidades públicas del orden nacional y en particular la Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial- Cali, están facultadas para hacer efectivos los créditos exigibles a su favor y de la Nación.

- 19.2. El artículo 1º de la Ley 1066 de 2006, “Por la cual se dictan normas para la normalización de la cartera pública y se dictan otras disposiciones”, prescribe:

**“ARTÍCULO 1o. GESTIÓN DEL RECAUDO DE CARTERA PÚBLICA.** Conforme a los principios que regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público.”

Subsiguientemente el artículo 2 ibidem, señala:

**“ARTÍCULO 2o. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES PÚBLICAS QUE TENGAN CARTERA A SU FAVOR.** Cada una de las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades



y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado y que dentro de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos del nivel nacional o territorial deberán: 1. Establecer mediante normatividad de carácter general, por parte de la máxima autoridad o representante legal de la entidad pública, el Reglamento Interno del Recaudo de Cartera, con sujeción a lo dispuesto en la presente ley, el cual deberá incluir las condiciones relativas a la celebración de acuerdos de pago”.

A su vez, el artículo 5 de la precitada normativa dispone:

**“ARTÍCULO 5o. FACULTAD DE COBRO COACTIVO Y PROCEDIMIENTO PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS.** *Las entidades públicas que de manera permanente tengan a su cargo el ejercicio de las actividades y funciones administrativas o la prestación de servicios del Estado colombiano y que en virtud de estas tengan que recaudar rentas o caudales públicos, del nivel nacional, territorial, incluidos los órganos autónomos y entidades con régimen especial otorgado por la Constitución Política, tienen jurisdicción coactiva para hacer efectivas las obligaciones exigibles a su favor y, para estos efectos, deberán seguir el procedimiento descrito en el Estatuto Tributario.”*

20. El Título IV de la Ley 1437 de 2011 por la cual se expidió el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, a partir del artículo 98, establece el “DEBER DE RECAUDO Y PRERROGATIVA DEL COBRO COACTIVO, señalando:

“Las entidades públicas definidas en el parágrafo del artículo 104 deberán recaudar las obligaciones creadas en su favor, que consten en documentos que presten mérito ejecutivo de conformidad con este Código. Para tal efecto, están revestidas de la prerrogativa de cobro coactivo o podrán acudir ante los jueces competentes.”. (Subrayado fuera del texto original)

21. El artículo 99, de la Ley 1437 de 2011 alude a qué DOCUMENTOS PRESTAN MÉRITO EJECUTIVO A FAVOR DEL ESTADO, señalando que “Prestarán mérito ejecutivo para su cobro coactivo, siempre que en ellos conste una obligación clara, expresa y exigible”, enunciando:

1. **Todo acto administrativo ejecutoriado** que imponga a favor de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero, en los casos previstos en la ley.
2. Las sentencias y demás decisiones jurisdiccionales ejecutoriadas que impongan a favor del tesoro nacional, o de las entidades públicas a las que alude el parágrafo del artículo 104, la obligación de pagar una suma líquida de dinero.
3. Los contratos o los documentos en que constan sus garantías, junto con el acto administrativo que declara el incumplimiento o la caducidad. Igualmente lo serán el acta de liquidación del contrato o cualquier acto administrativo proferido con ocasión de la actividad contractual.
4. Las demás garantías que, a favor de las entidades públicas, antes indicadas, se presten por cualquier concepto, las cuales se integrarán con el acto administrativo ejecutoriado que declare la obligación.
5. Las demás que consten en documentos que provengan del deudor.

Al respecto la H. Corte Constitucional en la sentencia C-069 del 23 de febrero de 1995, lineó:

*“La existencia del acto administrativo está ligada al momento en que la voluntad de la Administración se manifiesta a través de una decisión. **El acto administrativo existe, tal como lo señala la doctrina, desde el momento en que es producido por la Administración, y en sí mismo lleva***





***envuelta la prerrogativa de producir efectos jurídicos, es decir, de ser eficaz. De igual manera, la existencia del acto administrativo está ligada a su vigencia, la cual se da por regla general desde el momento mismo de su expedición, condicionada, claro está, a la publicación o notificación del acto, según sea de carácter general o individual.***

*"(...) el acto administrativo tiene carácter ejecutivo, produce sus efectos jurídicos una vez cumplidos los requisitos de publicación o notificación, lo cual faculta a la Administración a cumplirlo o a hacerlo cumplir." (Negrillas y subrayas fuera de texto original)*

Ninguno de los anteriores aspectos, han sido omitidos por la NACIÓN RAMA JUDICIAL, es por ello que no han sido desvirtuados por la parte actora para este momento procesal, es decir, están en concordancia con las normativas transcritas, aunado a lo anterior, están revestidas de la PRESUNCIÓN DE LEGALIDAD.

De lo anterior se colige que los actos administrativos contentivos de obligaciones a favor del Nación – Rama Judicial son exigibles a partir de su notificación al deudor, actuación que se surtió de conformidad con la ley, agotado el trámite en sede administrativa; vencido el término otorgado para el pago sin que se hubiere satisfecho la obligación a cargo de la demandante, se trasladó a la dependencia de cobro coactivo con el fin de hacer efectivo el derecho.

22. No se advierte ninguna ilegalidad en el trámite de cobro coactivo adelantado por la NACIÓN- RAMA JUDICIAL, como empleador cotizante y que dicho cobro tiene sustento en lo establecido en la Ley 100 de 1993 y preceptivas normativas a las cuales se está haciendo alusión, se constituye en un imperativo legal el realizar el recobro a la hoy demandante EPS SURA S.A., de las prestaciones económicas a efectos de que no se incurra en un detrimento patrimonial por la indebida apropiación de los recursos del Estado o Nación, por cuanto no media causa alguna que justifique la pérdida de las sumas dinerarias que en derecho le corresponden a mi representada.
23. Como se ha expuesto, la entidad adoptó un procedimiento idóneo para obtener el reintegro de estas prestaciones económicas a cargo del Sistema de Seguridad Social en Salud, a través del cobro por vía coactiva, cuando sociedades como las que hoy ha impetrado demanda a través de este medio de control, se sustraigan al cumplimiento de las obligaciones o lo retarden sin justificación alguna, motivados por una posibilidad de impago, es por ello que facultada en la ley, mi representada acude al cobro coactivo, máxime cuando las sumas dinerarias a recobrar ostentan la naturaleza de públicas, en un resguardo o preservación de los dineros que hacen parte del Presupuesto General de la Nación; aunado a lo anterior, y como se dijo en líneas precedentes los actos administrativos que ordenaron el recobro fueron expedidos por quien estaba facultada legalmente y con todas las garantías del Debido Proceso, Derecho de Defensa y cuya motivación fue conforme a la realidad material y procesal.
24. Frente a lo manifestado por EPS SURAMERICANA S.A., es necesario precisar que el Grupo de Cobro Coactivo como ejecutor de una orden, antes de proceder con la radicación verifica que el acto administrativo cumpla con los requisitos para prestar merito ejecutivo, circunstancias que se dieron en el presente asunto; así mismo, se debe aclarar que las actuaciones administrativas que se surtieron dentro del proceso en esa instancia y que ordenó el reintegro de incapacidades (Área de Recursos Humanos) en contra de la EPS S.A. demandada en sede de Jurisdicción Coactiva, NO son objeto de conocimiento ni pronunciamiento por parte de esa dependencia, dado que el trámite administrativo de cobro coactivo, es un procedimiento independiente que se adelanta con el fin de cumplir la orden administrativa "Por medio de la cual se ordena un reintegro", teniendo como título ejecutivo base del recaudo la copia auténtica de la Resolución con el lleno de los Requisitos Legales y Normativos exigidos para tales efectos.



25. No obstante de los documentos allegados al expediente, se logra establecer que el trámite administrativo fue eficaz y oportunamente agotado, ya que se realizó en repetidas oportunidades cobro incapacidades, además por cuanto se garantizó el agotamiento oportuno de los recursos en sede administrativa necesarios para que quede constituida la exigibilidad del título ejecutivo, de manera que, otorgando los recursos de ley –Recurso de reposición (optativo) y en subsidio apelación (obligatorio) - como presupuestos básicos del trámite administrativo, se da aplicación a los principios de contradicción, debido proceso y doble instancia. Así pues, una vez notificado el acto administrativo, queda ejecutoriado el título y se hace exigible.
26. Los actos administrativos objeto de esta controversia, como quiera que fueron expedidos con apego a la ley, **se constituyen en verdadera fuente de obligaciones** y apelando a la definición de ACTO ADMINISTRATIVO, se tiene:

*“El Consejo de Estado ha precisado que el acto administrativo es toda manifestación de voluntad de una entidad pública, o de un particular en ejercicio de funciones públicas, capaz de producir efectos jurídicos”.*<sup>3</sup>

En concordancia con lo anterior:<sup>4</sup>

- i) Constituye una declaración unilateral de voluntad.
- ii) Se expide en ejercicio de la función administrativa, por parte de una autoridad estatal o de particulares.
- iii) Se encamina a producir efectos jurídicos «por sí misma, de manera directa sobre el asunto o la situación jurídica de que se trate y, por ende, vinculante».
- iv) Los efectos del acto administrativo consisten en la creación, modificación o extinción de una situación jurídica general o particular, que impacta los derechos u obligaciones de los asociados, «sean subjetivos, personales, reales o de crédito».

*“Igualmente, esta corporación ha precisado que los actos administrativos pasibles de control jurisdiccional son aquellos catalogados como definitivos, esto es, «los que decidan directa o indirectamente el fondo del asunto o hagan imposible continuar la actuación*

*Bajo este marco conceptual, es válido sostener que la jurisdicción de lo contencioso administrativo únicamente se ocupa del estudio de los actos definitivos, expresos o fictos, que culminen un proceso administrativo, en la medida en que se presumen legales, gozan de los atributos de ejecutividad y ejecutoriedad e impactan en las relaciones de las personas naturales y jurídicas, sus derechos y obligaciones.”*<sup>5</sup>

## 27. NO SE CONFIGURA LA PRESUNTA FALTA DE MOTIVACIÓN DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS ACUSADOS:

Habrà de tenerse en cuenta que, frente a este cargo, no ha probado la parte actora la vulneración a ningún requisito de fondo en la expedición del acto administrativo, ni ninguna violación al Debido Proceso, carga que ha omitido acreditar la parte actora.

<sup>3</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 26 de agosto de 2004, expediente 2000-0057-01, M.P. Dr. Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.

<sup>4</sup> Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, sentencia del 10 de abril de 2008, expediente 25000-2324-000-2002-00583-01, M.P. Dr. Rafael E. Ostau de Lafont Pianeta.

<sup>5</sup> Sentencia 2017-06031 de 2020 Consejo de Estado





Como puede advertirse su señoría, hay una exposición clara de los motivos o razones que dieron origen a la manifestación de voluntad de la administración lo que se advierte del contenido de los mismos.

A su vez, se garantizó de manera plena, reiterada y conforme lo establece la ley, de la oponibilidad de los actos administrativos demandados, por lo que no se configura este cardo.

La inactividad de la hoy demandante no puede ser premiada con una sentencia favorable a sus pretensiones, de la prueba que obra en el expediente claramente se advierte la puesta en conocimiento de todas las decisiones adoptadas por la RAMA JUDICIAL -DIRECCIÓN EJECUTIVA SECCIONAL CALI por lo que sus omisiones y verificaciones no pueden para la prosperidad de las pretensiones de la demanda, la administración no puede estar sometida a la mera voluntad de aquellos con los que se relaciona.

28. El Decreto 780 de 2016 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social”, expresa:

“Artículo 2.1.13.4. Incapacidad por enfermedad general. Para el reconocimiento y pago de la prestación económica de la incapacidad por enfermedad general, conforme a las disposiciones laborales vigentes, se requerirá que los afiliados cotizantes hubieren efectuado aportes por un mínimo de cuatro (4) semanas. (...)”. Subraya fuera de texto.

Como se puede observar de la norma trascrita, la misma condiciona el reconocimiento y pago de las incapacidades por enfermedad general, al hecho que los “afiliados cotizantes” hubieren efectuado “aportes” por un mínimo de cuatro (4) semanas. Valga la pena recalcar, que de conformidad con las normas vigentes, los afiliados cotizantes efectúan sus aportes al Sistema de Seguridad Social en Salud, a través de las Entidades Promotoras de Salud, por tanto, como literalmente lo señala el precepto legal, el afiliado debe haber cotizado como mínimo como cuatro (04) semanas al sistema, más no a la entidad empleadora.

29. Así pues, de conformidad con las previsiones del Código Civil, “Cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal a pretexto de consultar su espíritu”. Además, “Las palabras de la ley se entenderán en su sentido natural y obvio, según el uso general de las mismas palabras; pero cuando el legislador las haya definido expresamente para ciertas materias, se les dará en éstas su significado legal”, razón por la que no hay lugar a traer más interpretaciones de las que gramaticalmente traen las normas enunciadas y las palabras “afiliados cotizantes” y “aportes”, se deben entender conforme a las normas que en la actualidad regulan la Seguridad Social en Salud.

el concepto emitido por el Ministerio de Salud y Protección Social en Salud, el cual se apoya en el Decreto 780 de 2016, que señala que, para el reconocimiento y pago de la incapacidad por enfermedad general, el afiliado deberá contar, como mínimo, con cuatro (4) semanas cotizadas hacia atrás, sin tener en cuenta que dicha cotización se haya realizado en la nueva empresa en que labora o en la anterior; ya que lo que importa es la fecha de afiliación al Sistema de Seguridad Social en Salud, le solicito proceder al reconocimiento y pago de la incapacidad por enfermedad general, sobre la cual se negó el reconocimiento y pago.

## **EXCEPCIONES**

### **1. INEPTA DEMANDA POR FALTA DE CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS**

**FORMALES:** Pues tal y como se advierte de la conciliación extrajudicial, pues se solicita La suspensión de toda actuación administrativa, coactiva, sin sustento que individualice en relación con la gestión de cobro coactivo a qué acto administrativo alude.



**2. LA INNOMINADA O GENÉRICA:** Prevista en el artículo 187 inciso segundo del C.P.A.C.A., esto es, “*cualquier otra que el fallador encuentra probada*”, aunque no hubiese sido propuesta.

### **PETICIONES**

Respetuosamente solicito a su señoría:

1. Que se nieguen las pretensiones de la demanda, por las razones de hecho y de derecho expuestas en este escrito.
2. **Subsidiariamente:** Que declare la prosperidad de los demás medios exceptivos que fueron alegados o aquellos que se encuentren probados, aunque no hayan sido propuestos.
3. Se condene a costas a la parte actora Condenar en costas al extremo activo, por cuando la defensa de los intereses de la NACIÓN- RAMA JUDICIAL DESAJ, no la realizo ad honorem, mi vinculación es a través de un contrato de prestación de servicios de carácter oneroso, mi representada judicial debe realizar una erogaciones en favor de esta apoderada, hecho que afirmo que puede ser constatado con la información que se encuentra contenida en el poder que me fuera otorgado y accediendo al Sistema Electrónico de Contratación Pública del Estado Colombiano SECOP-II, la cual es de libre acceso.

A su vez, teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 39 de la Ley 80 de 1993, el cual prescribe:

*“ARTÍCULO 39.- De la Forma del Contrato Estatal. Los contratos que celebren las entidades estatales constarán por escrito y no requerirán ser elevados a escritura pública”*

Así que se encuentra acreditada la exigencia del artículo 365 del C.G.P., numeral 8, el cual señala:

Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron y en la medida de su comprobación.

### **PRUEBAS**

Sírvase su señoría, tener por su valor probatorio las allegadas legal y oportunamente, a su vez, respetuosamente solicito decretar las pruebas de oficio que considere pertinentes, conducentes y útiles al proceso.

Se allegan como antecedentes administrativos los que fueron suministrados por la entidad.

### **ANEXOS**

1. Poder que me fuera otorgado por la señora Directora Ejecutiva Seccional de Administración Judicial – Cali, doctora CLARA INÉS RAMÍREZ SIERRA, con sus respectivos anexos.

### **NOTIFICACIONES**

Correo oficial para notificaciones judiciales: [dsaiclnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:dsaiclnotif@cendoj.ramajudicial.gov.co)

Atentamente,



Rama Judicial  
Consejo Superior de la Judicatura  
República de Colombia

Consejo Superior de la Judicatura  
Dirección Ejecutiva Seccional de Administración Judicial  
Cali – Valle del Cauca

**NANCY MAGALI MORENO CABEZAS**

C.C. No. 34.569.793

T.P. 213.094 del Consejo Superior de la Judicatura.

Cel. 3164900473

Mi correo institucional: [galdesajvalle4@cendoj.ramajudicial.gov.co](mailto:galdesajvalle4@cendoj.ramajudicial.gov.co)